

FICHA TÉCNICA – SEGUNDA INSTANCIA	
1. INFORMACIÓN PROCESO	
- NUMERO DEL EXPEDIENTE:	1704-00-2018-156
- PONENTE:	Directora General de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC.
- INVESTIGADOS:	R.M.V
- CARGO:	facilitador IV, Código 104, Grado 04, ubicado en la División de Gestión Control a Viajeros.
- ENTIDAD:	DIAN
- CIUDAD:	Bogotá
- TEMA:	realizar objetivamente y en forma dolosa la conducta de cohecho propio, descrito en la ley coma delito y haber realizado objetivamente en forma doloso la conducta descrito en la ley como delito, sancionable a título de dolo, llamado favorecimiento por servidor público.
2. ANTECEDENTES	
Síntesis de los hechos El origen de la presente investigación tiene sustento en una publicación realizada el 6 de marzo de 2017 por la Fiscalía General de la Nación, en la cual se da a conocer una noticia respecto a que se dismanteló una red de lavadores de activos y contrabandistas que operaban en Colombia , China y Estados Unidos, con ocasión de la operación denominada "Imperio", desarrollada de manera conjunta con funcionarios de la Agencia del inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, que permitió la captura de 19 personas, entre ellas al funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales R.M.V. La Fiscalía 75 Delegada ante los Jueces Penales a el Circuito Especializados de Bogotá, formuló acusación en contra del señor R.M.V, exponiendo que mediante la actuación de agentes encubiertos ubicados en el Aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá fue posible identificar que el funcionario de la DIAN investigado presuntamente apoyaba el ingreso irregular de mercancías de organizaciones dedicadas al contrabando a cambio de dadivas en la denominada puerta de control 6 del Aeropuerto el Dorado de Bogotá durante los meses de agosto a octubre de 2014.	
Reseña procesal	

1. El 23 de marzo de 2017 mediante auto, la Subdirección de investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, ordenó indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, dentro del expediente Disciplinario.

2. Mediante auto de 5 de septiembre de 2018 proferido dentro del expediente, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC ordenó la ruptura de la unidad procesal y en consecuencia la actuación disciplinaria adelantada contra el servidor de la DIAN, **R.M.V.**

3. Mediante auto de 23 de enero de 2019, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias profirió pliego de cargos' contra el servidor **R.M.V.**, en los siguientes términos:

"CARGO PRIMERO: al señor **R.M.V.**, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como funcionario de planta de la división de gestión de fiscalización de la dirección seccional de aduanas Bogotá en el cargo de facilitador IV, como presunto autor responsable de la infracción disciplinaria gravísima descrita en el numeral 1 del artículo 48 de la ley 734 del 2002, por realizar objetivamente y en forma dolosa la conducta de cohecho propio, descrito en ley como delito, al tenor del artículo 405 de la Ley 599 de 2000, por cuanto, al parecer, los días 29 de agosto, 2, 5, 10, 11, 16 de septiembre y 22 de octubre todos del 2014. En el puesto de control de su cargo recibió dinero para ejecutar un acto contrario a sus funciones, permitiendo la movilización de mercancía que para ese momento estaba en proceso de normalización aduanero.

CARGO SEGUNDO; **R.M.V.** quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como funcionario de planta de la División de gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá en el cargo de Facilitador IV. como presunto autor responsable de la infracción disciplinaria gravísima descrita en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Por haber realizado objetivamente en forma dolosa la conducta descrita en la Ley como delito sancionable a título de dolo, artículo 322 de la ley 599 de 2000-código penal bajo el nomen iuris de favorecimiento por servidor público, al omitir controles legales o reglamentarios para facilitar el disimulo de mercancías, pues abusando de su función, beneficio la movilidad de los mismos. Consistentes en celulares, artículos para celulares, lociones. calzado, entre otras, los días 29 de agosto 2, 5, 6, 10, 11 16 de septiembre y 22 de octubre todos del 2014, sin garantizar el control legal a cargo de la DIAN, pues posiblemente no contaban con la documentación expedida en debida forma para acreditar su legalidad (...)"

4. Mediante auto de 5 de julio de 2019, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias ordenó correr traslado para alegatos de conclusión, decisión que fue notificada al investigado y a la defensora de oficio el 10 de julio de 2019 como consta en las actas de notificación personal.

5. Mediante auto del 29 de noviembre de 2019, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, ordeno nuevamente correr traslado para alegar de conclusión al investigado teniendo en cuenta que este fue trasladado de la cárcel de Girardot a cumplir medida domiciliaria en su residencia en la ciudad de Bogotá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 numeral 8° y 169 de la Ley 734 de 2002', los cuales fueron allegados al plenario el 18 de diciembre de 2019 por la defensora de oficio y el 8 de enero de 2020 mediante correo electrónico por parte del investigado.

6. En el presente caso, a partir del 18 de marzo hasta el 3 de agosto de 2020, la Dirección General de la Agencia a través de diferentes resoluciones ordenó la suspensión de los términos en las actuaciones disciplinarias, como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional a causa del virus Covid-19 f.

7. El 4 de agosto la Subdirección de investigaciones disciplinarias de la Agencia ITRC, mediante Resolución No. 17317-00004 profirió fallo de primera instancia en el cual se estableció la responsabilidad del disciplinado frente a los cargos formulados por la presunta comisión de los delitos de cohecho propio y favorecimiento por servidor público profiriéndose sanción de destitución e inhabilidad por el término de doce (12) años.

8. La defensora de oficio del disciplinado mediante radicado No. 1-2020-C05091 de 28 de agosto de 2020 dentro de los términos legales interpuso recurso de apelación , el cual fue concedido por la Subdirección de investigaciones Disciplinarias mediante auto de 1 de septiembre de 2020, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC concedió recurso de apelación conforme a lo establecido en el artículo 115 inciso final de la Ley 734 de 2002.

3. CONSIDERACIONES DE PRIMERA INSTANCIA – SUSTENTACIÓN DEL RECUSO – CONSIDERACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, procede el Despacho a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensora de oficio del investigado **R.M.V** contra el fallo de primera instancia proferida mediante Resolución de 4 de agosto de 2020, por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, por encontrarlo responsable de la conducta disciplinaria gravísima descrita en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por realizar objetivamente en forma dolosa las conductas de cohecho propio descrita en el artículo 405 y favorecimiento por servidor público artículo 322 de la Ley 599 de 2000.

Para mayor comprensión en el presente estudio y teniendo en cuenta que al investigado se le sancionó conforme a dos cargos, se procederá a realizar el estudio de cada uno por separado, toda vez que, al señor **R.M.V**, se le atribuyó la realización objetiva de unas conductas reprochadas por la ley penal denominadas cohecho propio y favorecimiento por servidor público, cometidas en razón y con ocasión de la función o cargo que desempeñaba.

Primer cargo: respecto al delito de cohecho propio, artículo 405 de la Ley 599 de 2000

Deja ver, el artículo mencionado que este delito es atribuible a un Servidor Público que con su actuar retarda u omite hacer un acto propio de sus funciones o ejecuta un acto contrario a sus deberes, a cambio de dinero o de una promesa de dinero, sacando así un provecho económico e ilícito por sus funciones públicas.

(...)

Lo anterior, se traduce en que aceptar o recibir remuneración económica alguna por parte de un servidor público en cumplimiento de las funciones da lugar a la estructuración del delito de cohecho, en cualquiera de sus modalidades, en cuanto el funcionario retardó u omitió un acto

propio del cargo, absteniéndose de ejecutar uno a varios de los deberes funcionales obteniendo un beneficio propio.

En el caso bajo estudio, al investigado se le sancionó por la primera instancia porque “ (...) abusando de su cargo recibió dinero para ejecutar un acto contrario a sus funciones, permitiendo la movilización de mercancía que para ese momento estaba en proceso normalización aduanera (...)” considerando el fallador de primera instancia, que la conducta está descrita en la Ley penal como delito sancionable a título de dolo y que fue cometido por el investigado en razón y con ocasión de la función o cargo que desempeñaba dentro de la DIAN.

(...)

Es importante traer a colación, que para que se estructure la conducta disciplinaria estudiada, debe darse objetivamente los elementos del tipo penal del cohecho propio, esto es, debe existir una promesa remuneratoria, es decir, un acuerdo que el servidor público concertó para realizar un acto contrario a sus deberes.

La primera instancia, sostuvo que el disciplinado realizó un acuerdo con los dueños de las mercancías, circunstancia que fue observada por los agentes encubiertos, los cuales manifestaron que el señor **R.M.V** recibió una remuneración para omitir el control aduanero que debía realizar en ejercicio de sus funciones y como consecuencia de ello permitió ingresar la mercancía al país, conducta que se tipifica en el tipo objetivo de cohecho propio

Frente a los hechos objeto de investigación, la defensa argumentó que el disciplinado no era el responsable de verificar la mercancía, lo cual no es de recibo para esta instancia, pues era su deber funcional controlar que esta contara con la documentación legal mínima exigida para el ingreso o transito dentro del país, verificación que fue omitida por el servidor **R.M.V**, circunstancia que se establece en los informes de los agentes que estuvieron en cubierto, los cuales manifestaron haber recibido parte de los dineros entregados al servidor público investigado, con el fin de guardar silencio sobre la omisión de los controles.

De lo anterior, se establece en grado de certeza que el investigado **R.M.V** afectó de manera sustancial su deber funcional, toda vez que, estando asignado a la puerta 6 del Aeropuerto Internacional el Dorado de la Ciudad de Bogotá, entabló conversaciones con diferentes personas que transportaban mercancía para el ingreso al país; con el propósito de omitir los controles aduaneros tal como quedó demostrado de los informes de las agentes encubierto, permitiendo la movilización de la misma y a cambio, recibía dádivas.

Es menester mencionar que el funcionario **R.M.V**, tenía entre sus funciones conforme al manual del cargo “(...) Realizar las acciones necesarias para la ejecución de operativos, inspecciones, visitas y demás actividades que se desarrollen en el proceso en el que se desempeña, de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente (...).

Además, dentro de los autos comisorios expedidos por la DIAN para el ejercicio de sus funciones Se establece que el investigado **R.M.V** debía “(...) realizar control aduanero y verificar mercancías y sus documentos soporte en los puestos de control de las salidas del AEROPUERTO INTERNACIONAL en la ciudad de Bogotá de competencia y jurisdicción de lo Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá (...)”.

Conforme al informe de 6 de octubre de 2014, transcrito anteriormente, se pudo constatar que los agentes encubiertos, manifestaron haber recibido del investigado parte de las sumas que le fueron entregadas para omitir el control aduanero que con ocasión de sus funciones debía ejercer, situación irregular que se comprueba con la existencia de los títulos judiciales constituidos con el producto del dinero recibidos por el servidor y los agentes que estaban encargados de la operación y que reposan dentro del proceso penal radicado, adelantado por el Juzgado 11 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento.

(...)

Observa este Despacho que, la falta gravísima endilgada al investigado es resultado de una conducta reiterada, tal como consta en los informes de los agentes encubiertos, en la medida en que el recibo del dinero por parte del señor **R.M.V** fue producto de varios acuerdos que hiciera para desatender los controles aduaneros.

En consecuencia, conforme al material probatorio allegado al plenario, es claro que la conducta tipificada en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se adecuó a la conducta desplegada por el investigado **R.M.V**, en tanto que quedó probado que aceptó remuneración para ejecutar un acto contrario a sus deberes oficiales, en concordancia con el tipo penal de cohecho propio descrito en la ley como delito, según lo dispuesto en el artículo 405 de la Ley 599 del 2000.

Segundo cargo: el delito de favorecimiento por servidor público, de acuerdo con el artículo 322 del Código Penal.

Es importante traer a colación, que este delito es cometido únicamente por un Servidor Público, el cual evidentemente tiene un interés, toda vez que, a cambio de realizar las funciones encomendadas a su cargo recibió remuneración económica para permitir la movilización de mercancías que no cumplieran con los requisitos exigidos por la ley. Esta mercancía, según los agentes encubiertos, estaba conformada por calzado, perfumería y celulares, mercancía que tiene alta susceptibilidad de falsificación.

Resulta notorio el hecho, que dan cuenta los informes de los agentes encubiertos, en cuanto a que el disciplinado recibió dádivas por parte de los ciudadanos, lo que dio como resultado la entrega de la mercancía, pues como lo consideró el fallador de primera instancia "/.../ de haber cumplido con la legalidad no habría sido necesario entregar al funcionario ningún tipo de dádivas sino simplemente acreditar con los soportes necesarios de su legalidad /.../". circunstancia en la que debía intervenir el investigado por razón de su cargo y de sus funciones.

Frente a esta conducta el sujeto pasivo es el Estado, y es claro que el investigado abusó de su cargo y del poder que le confirió las funciones encomendadas como servidor de la DIAN, pues aceptó dádivas aprovechándose de su investidura ante los ciudadanos para favorecer el ingreso y circulación de la mercancía en el país, aprovechándose de su posición de garante que como servidor de aduanas tenía para verificar la documentación soporte y aplicar las medidas de control sobre las mercancías que no cumplieran los requisitos de ley para el ingreso.

Lo anterior, fue probado por los informes de los agentes encubiertos, que dieron como resultado, la veracidad en cuanto que, el investigado permitió la movilización de la mercancía sin los soportes documentales exigidos, aunando con el hecho causal respecto al primer cargo, donde se demostró que recibió reconocimientos económicos y dádivas por dicho actuar y que propició que dicha mercancía irregular se escapara de la órbita de la autoridad aduanera.

(...)

Al respecto el Juez concedió el uso de la palabra a la defensa "(...) minuto 49:00 señor defensor Se le concede el uso de la palabra frente al preacuerdo Suscrito Con la fiscalía general de la Nación (...)".

A lo que manifestó la defensa "(...) minuto 49:27 Ciertamente mi prohijado acepta su responsabilidad per los delitos imputados y aceptados, esto es el 322 inciso 1 que tiene una pena principal de multa y el de cohecho propio que sí tiene una pena principal de prisión. Minuto 49:48 Conozco los elementos materiales probatorios, la Fiscalía me los puso a disposición y mi prohijado devolvió la totalidad del dinero en suma de \$XXX que recibió por la comisión de las conductas punibles tal como lo aceptó la víctima, la DIAN, al punto que avaló llevar a cabo este acuerdo por su apoderado judicial (...)".

(...)

El anterior comportamiento, afectó la administración pública en el sentido que menoscabó la confianza depositada por los Ciudadanos frente al Estado, ya que, como funcionario de la DIAN, desconoció las funciones conferidas por la autoridad aduanera para ejercer la actividad Fiscalizadora, conforme al manual de funciones, el cual establece que el investigado debía "(...) Realizar las acciones necesarias para la ejecución de operativos, inspecciones, visitas y demás actividades que se desarrollen en el proceso en el que se desempeña, de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente (...) ' , pues omitió los controles sobre los documentos de la mercancía, sin encontrar esta Segunda Instancia justificación alguna. pues el servidor contaba con conocimientos técnicos en comercio y además una amplia trayectoria en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

(...)

También está demostrado que el investigado, al recibir dádivas, tenía un interés en el ingreso de dicha mercancía, circunstancia que no era propio de su cargo, toda vez que, procuraba no sólo obtener un beneficio económico, sino también favorecer a particulares en el ingreso y transporte de mercancía afectada por la ilegalidad, actuación que, al aprovecharse de su cargo, no sólo salió favorecido él, sino terceros que debieron ser intervenidos en razón a sus funciones.

Así las cosas, no sólo se configuro el favorecimiento de servidor público en la omisión de ejercer los controles aduaneros, que su cargo le imponía, sino el provecho propio y de terceros, conjugándose todos los elementos que requiere el artículo 322 de la Ley 599 de 2000 en concordancia con el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, confirmándose con ello la tipicidad de la conducta endilgada en el segundo cargo.

Por otro lado, respecto a las pruebas, la recurrente manifestó que, no existe prueba demostrativa de la "[...] completa convicción y certeza probatoria que permita asegurar que el servidor público cometió los faltos que se le imputan, implica que estas dudas se resuelvan en favor del investigado (...)".

(...)

No se puede pretender, como lo quiere hacer ver la recurrente que. en la valoración de pruebas, exista algún tipo de sometimiento al sistema de la tarifa legal en el cual la ley establezca específicamente el valor de las pruebas y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella, en ejercicio de una función que puede considerarse mecánica, de suerte que aquel casi no necesita razonar para ese efecto porque el legislador ya lo ha hecho por él. Es decir que, es viable establecer en los informes de los agentes encubiertos la conducta del servidor cuestionado, pues estos brindan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos lo que generó la certeza a la primera instancia de la consumación de la conducta.

Es importante advertir, que el operador disciplinario de primera instancia, en búsqueda de la verdad real de los hechos en desarrollo de la etapa de investigación, trasladó en debida forma los informes de policía del proceso penal, pero además realizó un estudio minucioso de los mismos por los cuales llegó a la convicción de la conducta realizada por parte del funcionario investigado.

Pese a lo anterior, el despacho al valorar los informes de los agentes encubiertos, observo un alto grado de convicción y credibilidad, como quiera que se trata de una prueba a través de la cual se percibió directamente las situaciones irregulares cometidas reiteradamente por el disciplinado al omitir efectuar los controles en el puesto denominado Puerta número 6 del Aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá a cambio de dádivas entregadas por diferentes personas para el ingreso de mercancías, evidenciándose en grado de certeza sobre la existencia de las faltas disciplinarias gravísimas, y la responsabilidad del disciplinado en los hechos objeto de investigación.

Lo anterior, significa que en materia probatoria el operador disciplinario Cuenta con libertad para demostrar la falta y la responsabilidad con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos y para determinarlos se cuenta Con una norma especial del Código Disciplinario único que contempla estos medios de pruebas.

(...)

En el presente caso, se allegó como prueba trasladada los informes de los agentes encubiertos, recaudados por la Agencia ITRC en diligencia de inspección administrativa realizado el 20 de abril de 2017 al proceso penal No. 1100160D0096201400001*, instruido por el Juzgado 11 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, de la cual se introdujeron al proceso disciplinario, entre otros, los mencionados informes, los autos comisorios del funcionario investigado de la DIAN, las declaraciones de los funcionarios que actuaron como policía judicial asignado en la operación IMPERIO y la Sentencia condenatoria de 20 de marzo de 2018, emitida por el Juzgado 11 Penal del Circuito con funciones de Conocimiento.

En cuanto al traslado de pruebas, el artículo 135 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 51 de la Ley 1474 de 2011.

(...)

Lo anterior explica, que la visita especial es uno de los medios de prueba contemplados en la Ley 734 de 2002, y en ellas el operador disciplinario está facultado para solicitar el traslado de esos medios probatorios a la actuación disciplinaria, dejando claro, como sucedió en el caso bajo estudio que dichos elementos materiales de prueba deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario, como lo observó la primera instancia, teniendo en cuenta que el investigado

a través de su defensa tuvo las oportunidades procesales legales para controvertirlas y ejercer en debida forma su derecho de defensa.

Para este Despacho, tampoco tiene votación de prosperidad el argumento defensivo consistente en la no demostración de la conducta, toda vez que, las pruebas trasladadas del proceso penal son de recibo en la medida en que el derecho disciplinario es, en esencia, un derecho autónomo, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional.

(...)

Por consiguiente, el operador jurídico fija el alcance de la norma disciplinaria que aplica, claro está, sin que lo haga en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales y no se lesione las garantías fundamentales de los investigados, sino dentro de las reglas fijadas en la legislación disciplinaria. En el presente caso esta instancia observa que los informes de los agentes encubiertos fueron obtenidos en legal forma como prueba trasladada por parte del operador disciplinario de primer grado, sumado a la observancia de las garantías procesales como quiera que dicha prueba fue trasladada, conocida y controvertida por la recurrente, actuación que no conlleva a la violación de los derechos al debido proceso y de defensa.

Así las cosas, no es procedente lo manifestado dentro del recurso respecto a que se genere una duda que deba ser resuelta a favor del investigado, pues los hechos fueron soportados con los medios Probatorios recaudados por la Primera Instancia, lo que no permite aplicar, como lo solicitó la defensa el principio de in dubio pro disciplinado, puesto que quedó ampliamente desvirtuada la presunción de inocencia del señor **R.M.V.**

(...)

Por lo que se observe entonces, que una es la finalidad de la sanción penal y otra la finalidad de la sanción disciplinaria, en cuanto la primera pretende la privación de la libertad y la segunda busca suspender o separar del cargo al servidor público con relación al servicio prestado, tal como lo ha indicado la Corte Constitucional.

(...)

Conforme al lineamiento jurisprudencial traído, no es dable establecer que, si un servidor público es enjuiciado penal y disciplinariamente por una misma conducta, se esté frente a una violación del principio del non bis in ídem y la presunción de inocencia.

(...)

Por esta razón no resulta incompatible que a un funcionario público al que se le siguió un proceso penal, no pueda seguirse un proceso disciplinario, por los mismos hechos, lo que tiene como finalidad establecer la responsabilidad frente al deber funcional que le asistía al señor **R.M.V.**, como, en este caso, en condición de Facilitador IV, Nivel 04, Grado 04, de la División de Gestión de fiscalización de la dirección seccional de Aduanas de Bogotá, para la época de los hechos.

Conforme a lo expuesto y estando de acuerdo con el fallo del o quo, se demostró que, el investigado, al recibir dinero y favorecer a terceros, vulneró el deber funcional de manera sustancial, toda vez que, como servidor del Estado ostenta una relación especial de sujeción y, por lo tanto, se espera que el comportamiento que debió desplegar en ejercicio de sus funciones sea acorde con el ordenamiento jurídico, sin estar amparado en alguna de las causales de exclusión de responsabilidad del artículo 28 de la norma referida. En este caso, el disciplinado al recibir dádiva favoreció a terceros para ingresar y transportar dentro del país mercancías que no reúnen los

requisitos legales, vulneró los principios de la administración pública para lo cual se configuró la falta disciplinaria a la luz del artículo 5 de la Ley 734 de 2002. '

Por último, en cuanto que la defensa solicitó en su recurso de apelación "(...) se tenga en cuenta los criterios de favorabilidad teniendo en cuenta los argumentos mencionados en la parte motiva al momento de fallar como consecuencia se sirva disminuir la calificación de la conducta del señor **R.M.V**, a lo menor aplicable al caso (...) ". Al respecto, esta segunda instancia establece que dicho argumento no es viable por cuanto el actuar del disciplinado, como se determinó anteriormente con el análisis del material probatorio, se tipificó como falta gravísima atribuida a título de dolo y conforme a lo previsto en el numeral 1° del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, por lo que procede la aplicación de la sanción consistente en destitución e inhabilidad general, la cual se fijó en el fallo de primera instancia en el término de 12 años, graduación que se hizo teniendo en cuenta los criterios contenidos en el artículo 47 de la Ley 734 de 2000 al considerar que:

"(...) el artículo 47 ibidem, el señor **R.M.V** no reporta antecedentes disciplinarios ni tiene cargo directivo o ejecutivo de la entidad más sin embargo con varias acciones infringió la misma disposición dos veces, concretada en dos tipos penales distintos, por lo que es pertinente fijar el término de inhabilidad general en el término de doce (12) años (...)"

Es importante mencionar que, esta segunda instancia comparte la dosificación de la sanción por cuanto que, la realidad procesal demuestra que el señor **R.M.V** ostentaba el cargo de Facilitador IV, Nivel 104, Grado 04 ubicado en la División de gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá para la época de los hechos, encuentra este Despacho que él a quo, aplicó los criterios relativos a no reportar antecedentes disciplinarios, ni tener cargo directivo o ejecutivo de la entidad, por lo que la sanción en 12 años teniendo en cuenta que. El investigado infringió dos disposiciones legales consideradas delito que generaron un grave daño social, agregándose el conocimiento de la ilicitud, lo cual hace que esta segunda instancia confirme la sanción impuesta en el fallo proferido por la Subdirección de Investigaciones disciplinarias de la Agencia ITRC, de destitución e inhabilidad general por el término mencionado.
(...)

4. RESUELVE - 2° INSTANCIA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 4 de agosto de 2020, por la Subdirección Técnica de Investigaciones disciplinarias de la Unidad Administrativa Especial Agencia ITRC a través del cual se sancionó con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO de doce (12) AÑOS, al Servidor **R.M.V**

SEGUNDO: NOTIFICAR a los sujetos procesales de conformidad con las previsiones legales.

TERCERO: contra la presente decisión no procede recurso alguno.